

“VENIMOS A LUCHAR POR EL PUEBLO, NO POR EL PODER”: el levantamiento indígena y popular en Ecuador 2019¹

Adrián Bonilla* y Mónica Mancero**

*Profesor titular principal FLACSO Sede Ecuador

**Profesora titular Universidad Central del Ecuador

Antecedentes

El Ecuador acaba de vivir a finales del año 2019 uno de los momentos más intensos de la historia de las luchas sociales. Un levantamiento que, convocado por el movimiento indígena, movilizó a incontables actores y a decenas de miles de personas espontánea y organizadamente para oponerse a una medida gubernamental. Este texto busca explicar el hecho alrededor del análisis de la política gubernamental y la reacción que provocó, la naturaleza contemporánea de la protesta, la descripción de los principales actores e intereses y las causas de la violencia.

El movimiento indígena en Ecuador irrumpió con fuerza hace tres décadas, convirtiéndose no sólo en un movimiento social sino en un actor político. En octubre de 2019, este mismo movimiento encabezó un proceso de levantamiento

popular, con el liderazgo de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie), la más importante agrupación social del Ecuador contemporáneo, que fue el telón de fondo de una crisis social e institucional que obligó al presidente Lenin Moreno a aceptar su demanda: la derogatoria de un Decreto que terminaba con los subsidios a los combustibles fósiles.

El país tiene una historia reciente de levantamientos protagonizados por la Conaie. En efecto, en 1990 el país pudo presenciar el primer levantamiento en época contemporánea, las demandas estaban relacionadas con sus reivindicaciones históricas y de carácter redistributivo como derecho y legalización de tierras, acceso a agua y riego, precios justos, y demandas de reconocimiento como construcción de un Estado plurinacional, educación bilingüe,

^{1/} Mujer indígena que acompañaba el duelo de Inocencio Tucumbi, muerto en el levantamiento. (Diego Cazar, La Barra Espaciadora)

medicina indígena². A partir de allí, el movimiento indígena se constituye en un actor político que superó el ventriloquismo que caracterizaba, según algunos académicos, a las formas de organización indígena, es decir la mediación que ejercían blanco-mestizos en el discurso y accionar de los indígenas. En contraposición, otros autores sostienen que los indígenas siempre mostraron capacidad de agencia e inclusión de sus agendas políticas.

Si bien las demandas específicas de los indígenas en los levantamientos de 1992, 1994, 1997, 2001 y 2015 han variado a lo largo del tiempo, el hilo conductor ha sido su lucha a favor de temas de identidad étnica, equidad, ambientalismo y contra varias políticas neoliberales de gobiernos erigidos en una sociedad inequitativa y excluyente, que no ha dejado de ser racista en el Ecuador contemporáneo.

La decisión gubernamental

Desde el año 2016 el Ecuador, que está dolarizado, afronta una contracción económica por la disminución en la demanda y en los precios de los bienes primarios en los mercados internacionales, particu-

larmente por la baja de los precios del petróleo, que han producido un importante déficit fiscal y de la balanza de pagos. El gobierno de Lenin Moreno respondió implementando medidas de corte ortodoxo para disminuir el gasto público como el despido de aproximadamente 20 mil servidores públicos, la contratación de una voluminosa deuda y la negociación con el FMI de un crédito por 4,5 mil millones de dólares que implicó compromisos para reducir el déficit. El plan de ajuste gubernamental incluyó medidas de compensación para los sectores más ricos de la población como la reducción de aranceles a dispositivos electrónicos y del impuesto a la salida de divisas; eliminación del pago anticipado de impuesto a la renta; la contribución especial para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de dólares anuales y la liberalización del precio de los combustibles que mantenían un subsidio de cuatro décadas; pero propuso la flexibilización de relaciones laborales, con riesgo de precarizar el trabajo formal y no consideró seriamente compensaciones para los más pobres.

Las medidas fueron rechazadas por sectores laborales e indígenas. La oposición más enfática fue al

^{1/} (<http://www.accionecologica.org/editoriales/1232-a-los-20-anos-del-levantamiento-indigena>).

Decreto que liberaba los precios de gasolina y diésel, subiendo los mismos en un 25% y un 120%, respectivamente. Para los sectores populares una medida de esta naturaleza impactaba no solo en el costo del transporte público sino también en el precio de los productos de primera necesidad.

Fue de dominio público que el régimen analizaba subir el IVA en varios puntos, a fin de elevar los ingresos fiscales. Sin embargo, esta medida se descartó porque los partidos de la derecha política ecuatoriana que, con frecuencia, votan junto al gobierno en el Parlamento, anunciaron su rechazo a la posibilidad. En su lugar, el gobierno decidió eliminar los subsidios a los combustibles y presentó débiles medidas compensatorias para los estratos de pobreza. Estas decisiones no fueron aceptadas por las organizaciones indígenas, quienes convocaron a una marcha hacia Quito, y llamaron a un paro general para rechazar el plan de ajuste y las políticas neoliberales que se habrían acordado con el FMI.

Las características de este levantamiento

La intensidad de la movilización indígena en el levantamiento del 2019 fue inédita: su capacidad de convocatoria a las comunidades, la adhesión del conjunto de organi-

zaciones laborales y de movimientos sociales, así como la articulación espontánea de organizaciones locales, y la vinculación no siempre orgánica de grupos de jóvenes a las movilizaciones, fueron características nuevas en la protesta vivida en el Ecuador.

A lo largo de su historia la Conaie ha convocado a levantamientos indígenas con cierta frecuencia. Algunos de ellos fueron muy exitosos. El primero, por ejemplo, en 1990, abrió el camino a una modificación de la estructura del Estado que dio paso a los conceptos de “nacionalidades indígenas”, multiculturalidad y de territorialidad, los que incluso se plasmaron en las Constituciones posteriores. En el año 2015, un levantamiento durante el gobierno de Correa dejó decenas de detenidos en todo el país con acusaciones de rebelión, pero ninguna de las convocatorias tuvo la capacidad de movilización y la intensidad en la protesta que el de 2019.

La explicación de este fenómeno no radica necesariamente en la fortaleza orgánica de la Confederación. La entidad indígena es muy heterogénea en su composición y la articulación de posiciones comunes aún dentro de su dirigencia nunca ha sido fácil. No es una organización vertical y piramidal con un mando único ni bases disci-

plinadas. De hecho, durante las jornadas de protesta fueron frecuentes las contradicciones en la dirigencia y aún la cuenta de Twitter de la organización expresó posiciones diferentes. Por supuesto que hay federaciones y organizaciones locales, sobre todo a nivel rural, pero el éxito de la convocatoria, parece haberse radicado en el momento, en la oportunidad que fue provocada por las medidas económicas, antes que en la preparación de las movilizaciones con prolijidad militante.

El llamado al Paro Nacional fue hecho, además, por la organización sindical más importante del país, el Frente Unitario de los Trabajadores, sin embargo, el protagonismo de la dirección política perteneció al movimiento indígena. De todas maneras, el respaldo de esta última organización legitimó el llamado sobre todo en los ámbitos en donde la izquierda tradicional ecuatoriana se desempeña. Todas las organizaciones de un muy fragmentado movimiento estudiantil se sumaron y una infinidad de colectivos de movimientos sociales: ambientalistas, feministas, maestros y organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos esto ya había ocurrido en el pasado, pero no en la última década en que desde el Estado se crearon organizaciones sociales destinadas a vincularlas a la agenda gubernamental.

El éxito de ellas duró lo que ese gobierno, no se arraigaron nunca en la sociedad.

La movilización indígena se convocó casi al mismo tiempo que un paro nacional de los transportistas, el mismo que duró sólo un día. Las comunidades indígenas rurales salen hacia Quito para realizar una concentración y marcha y son acompañadas en ello por decenas de miles de personas que se volcaron a las calles. La magnitud de la movilización, en realidad, no fue prevista por nadie y la respuesta a ella por parte del gobierno fue cercar el centro histórico de Quito y trasladar sus operaciones a la ciudad de Guayaquil. La capital ecuatoriana, si bien fue el epicentro de la protesta, no fue el único lugar en donde ella se desarrolló. De hecho, en prácticamente todas las provincias del Ecuador, muchas de ellas en donde no hay organizaciones filiales de la Conaie, se desplegaron episodios de bloqueo de calles y carreteras y otras formas de protesta que efectivamente generaron un paro total en el país.

Qué intereses estuvieron en juego y qué actores los representan

El levantamiento indígena y popular tuvo la capacidad de hacer confluir a diversos actores sociales: el movimiento indígena, trabajado-

res sindicalizados, federaciones de transportistas, estudiantes, maestros, mujeres, pobladores urbanos salieron a protestar en las diferentes ciudades del país, así como en carreteras, barrios y plazas. El protagonista del levantamiento fue, sin duda, el movimiento indígena, el cual mostró una notable recomposición al convocarse en número creciente a la marcha hacia Quito.

Durante la década que gobernara el ex presidente Rafael Correa, numerosos movimientos sociales, y muy especialmente la Conaie, habían sido estigmatizados, reprimidos y criminalizados, como resultado de un discurso homogeneizador que en su retórica buscaba eliminar los corporativismos y volver al país una sociedad transparente, sin lo que a juicio del ex Jefe de Estado eran las ataduras, prebendas y negociaciones permanentes que exigían los diversos actores sociales y que se habían desplegado desde la década de los noventa.

Esta contención social, provocada durante el período de la denominada "Revolución Ciudadana", se desbordó en el régimen de Moreno que, luego de la ruptura al interior del movimiento político Alianza País con el ex gobernante, produjo cierta apertura democrática con los movimientos sociales y diferentes actores políticos. Por

ejemplo, se otorgó un comodato a fin de que la casa sede de la CO-NAIE en Quito pueda continuar en manos del movimiento indígena, distanciándose así de la política de Correa, en cuyo gobierno la organización fue despojada de su local. Al mismo tiempo se legisló la restitución de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi que fue cerrada en el correísmo. Igualmente, se iniciaron diálogos para restituir la educación intercultural bilingüe que también fue afectada durante la gestión del ex presidente.

No obstante, estos diálogos no prosperaron y el gobierno, en medio de una marcada debilidad y de la división de su antiguo partido, con bajas calificaciones de gestión en las encuestas, y con una representación minoritaria en la Asamblea, terminó apoyándose en la derecha ecuatoriana, que aprovechó la ruptura con Correa para incidir en forma determinante en las políticas gubernamentales.

El debilitamiento paulatino del régimen es un dato importante. En diciembre de 2017, meses luego de asumir el poder, la credibilidad del presidente registró un 62,8 % y la aceptación de su gestión se puntuó en 70,9 % (Cedatos, 2017). En ese mismo año, el 38% consideraba que se gobernaba "para el bien de todo el pueblo", pero esto sufrió una caída estrepitosa de 21

puntos en 2018 (Latinobarómetro, 2019). En 2019, antes de las medidas, la credibilidad del primer mandatario se ubicaba en apenas 16% y el malestar por la situación del país era evidente pues la mayoría de la población se sentía “preocupada, incierta, triste, pesimista, y molesta” (Cedatos, 2019).

Medidas tan drásticas como la liberalización de los precios de los combustibles que se mantuvieron durante cuatro décadas, sin que medie ninguna socialización sobre sus efectos y compensaciones, era previsible que generen malestar en la ciudadanía. Más aún si tomamos en cuenta las experiencias de conflicto social en reacción a políticas económicas que han ocurrido en el país desde el retorno a la democracia, que, por ejemplo, en las décadas pasadas terminaron en confluencias con los militares y el Parlamento y precipitaron la caída de tres presidentes.

La reacción popular a las medidas fue masiva a lo largo del territorio nacional, pero la protesta estuvo acompañada no solo de marchas y manifestaciones en las calles sino también de incendios de edificios públicos, daños a infraestructura y medios de comunicación; intentos de sabotaje de sistemas de agua, de infraestructura petrolera; interrupción de vías; secuestro de policías y militares. Frente a esta con-

vulsión social se desplegó la policía, salió el Ejército a las calles, se declaró estado de excepción y toque de queda. El saldo del conflicto fue de diez muertos, más de mil de heridos y detenidos en el país.

El respaldo de las Fuerzas Armadas fue determinante para la continuidad del gobierno del presidente Moreno. En tres derrocamientos de gobiernos anteriores fue la pérdida de respaldo de las Fuerzas Armadas lo que precipitó su caída. En la agenda del movimiento indígena no estuvo contemplada la renuncia del presidente sino el rechazo del plan de ajuste y específicamente la derogatoria del aludido Decreto.

La respuesta política del gobierno ecuatoriano fue atribuir la protesta a una conspiración internacional protagonizada por el ex presidente Correa y sus partidarios. El hecho cierto es más bien que esta fuerza política cometió un error estratégico importante pues intentó sumar a la agenda social, una demanda electoral, que básicamente consistía en exigir la salida del presidente y el adelanto de elecciones en el Ecuador. La reacción de los movimientos sociales fue el desacoplamiento explícito de la agenda electoral de Correa y una retórica de distanciamiento que evocó los diez años de un

gobierno intolerante y represivo en contra de los movimientos sociales. El resultado de esta política fue el aislamiento del ex presidente y de su partido y la generación de un escenario de vulnerabilidad. Luego del levantamiento varios de sus dirigentes han sido apresados bajo cargos de conspiración o han buscado la protección del gobierno de México sin que ninguna fuerza social o política, ni siquiera las entidades de defensa de los Derechos Humanos los hayan protegido. El uso político en lógica electoral del movimiento social fue extremadamente costoso para esa organización política y su caudillo.

La salida a la tensa situación generada se provocó luego de una mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal que instalaron una mesa de diálogo cuyo resultado fue la derogatoria del Decreto que ordenaba las medidas económicas para elaborar uno nuevo con el aporte del movimiento indígena. Los líderes indígenas llamaron a suspender las movilizaciones y el país entró, inmediatamente, en una aparente calma.

Luego de la gestión política de la movilización social no parece mejorar la popularidad del gobierno ecuatoriano. Si bien es cierto que los medios de comunicación convencionales, las cabezas de los

distintos poderes del estado, los aparatos de seguridad y las voces de las élites económicas del país han salido en su respaldo, la credibilidad del presidente luego del levantamiento popular se ubica en 13.8% y la calificación a su gestión en 16.3% (Click Research, octubre de 2019).

La sociedad ecuatoriana, luego de estos acontecimientos, se ha mostrado polarizada. Los medios de comunicación jugaron su propio rol, los institucionalizados en respaldo del régimen y cuestionando el “vandalismo” en las manifestaciones, mientras que medios comunitarios y redes sociales cubrían la fuerte represión del Estado. Sin embargo, esta polarización es más aparente que real, puesto que el argumento de que los indígenas son una minoría que se quiere imponer en el país, utilizado por medios y opinión pública que expresa los intereses de las élites, se desbarata cuando conocemos que 68.5% de la población apoyó el levantamiento, y apenas un 26.5% respaldó el Decreto que eliminaba los subsidios (Click Research).

Qué explica la violencia

El levantamiento indígena y popular en contra de las medidas de ajuste en el Ecuador da cuenta de un fenómeno social complejo. Tie-

ne que ver con varias causas estructurales y algunas que se explican en el escenario contingente. Entre las primeras, el Ecuador sigue siendo una sociedad profundamente fracturada, atravesada por una pesada carga colonial en la cultura política, que se refuerza con los procesos de concentración de la propiedad contemporáneos y que se explica en lógicas de exclusión y discriminación por identidad étnica y por pertenencia de clase. La inequidad de la sociedad ecuatoriana no ha sido resuelta por los últimos procesos políticos. Aunque el índice de Gini bajó levemente en el gobierno pasado, las lógicas de exclusión y los escenarios de clausura en los procesos de participación, no democratizaron la sociedad. Los sectores menos afortunados de la población fueron y siguen siendo vulnerables a las decisiones informadas por los discursos de las élites. El deterioro de las condiciones de vida debido a la ausencia de recursos gubernamentales y la localización de los mismos en lógica empresarial aumentaron, por ejemplo, la pobreza especialmente la rural.

En este marco, la insatisfacción de la población con su situación es un dato de la realidad. Todas las encuestas a propósito de expectativas inmediatas y futuras, por ejemplo, evidencian un profundo

pesimismo, sobre todo en los quintiles económicos más bajos de la población. Este sentimiento de frustración y de expectativas sin posibilidades está especialmente arraigado en la población más joven. Muchachos y chicas de secundaria que intuyen que sus posibilidades de movilidad social son mínimas que las de repetir o empeorar la pobreza en la que vivieron sus padres en su propia vida son altas.

Precisamente los más jóvenes fueron los protagonistas de innumerables hechos violentos y de vandalismo. Intentos de asalto a negocios privados, sobre todo en los barrios populares, destrucción de la propiedad pública, agresiones a personas y fuerzas del orden. Estas conductas generaron, luego de la protesta, una reacción sin precedentes en el pasado inmediato de racismo y clasismo en el discurso de los medios de comunicación convencionales y entre los estratos económicos más altos del país. Los términos más abyectos han sido usados contra los dirigentes indígenas y varios de ellos, incluso, han sido enjuiciados por políticos de la derecha. Pero el hecho cierto es que buena parte de los destrozados obedecen a un sentimiento anti social que tiene explicaciones sociológicas antes que conspirativas.

Independientemente de lo anterior, el intento de la fuerza política que respalda al ex presidente de fundir su demanda electoral de adelantar comicios con la reivindicación social, permitió que se la responsabilizara del caos, que la dirigencia social se apartara de ella, y que incluso se forjaran las más insólitas teorías de conspiración internacional para explicar los incidentes violentos de la protesta. Las conspiraciones que, por supuesto existen, sin embargo, no son causas de los procesos sociales, sino productos de ella. No explican los escenarios estructurales, sino episodios aislados. En el caso ecuatoriano, ello le costó a la fuerza política que promocionaba una agenda electoral su vulnerabilidad y aislamiento.

Finalmente, como en otros países, la tecnología de redes sociales, mensajería y contacto virtual cambió muchísimo el contexto de la protesta social y de su control. La movilidad de las masas, la convocatoria, el desplazamiento de las comunidades, la dureza de la fuerza pública, deben leerse también a la luz de estas circunstancias. Fue una jornada cuya intensidad nadie intuyó, ni quienes la convocaron, ni las excluyentes élites ecuatorianas, y tampoco el gobierno.

Reflexión final

La insatisfacción social con el modelo económico, la dificultad gubernamental para comprender las causas de la movilización, la producción de políticas económicas que excluyeron las necesidades de los sectores más pobres de la población y la sensación de anomia y ausencia de expectativas de movilidad social, especialmente de los más jóvenes, en un contexto de carencia de recursos explican la intensidad de la protesta ecuatoriana. Los movimientos sociales, y particularmente las organizaciones indígenas retornaron al centro del escenario con inusitada fuerza luego de haber sido sitiados, divididos y controlados en la década precedente. ¿Quién pudo capitalizar políticamente? Al parecer ninguno de los actores políticos conocidos, lo que provocaría un vacío de representación. Especialmente golpeadas salen las fuerzas que intentaron inmiscuir una agenda electoral en la protesta.

Sin embargo de lo anterior, la reacción de los grupos elitarios, luego de los eventos, ha sido agresiva. Las lógicas racistas y clasistas que atraviesan en forma subrepticia a la sociedad ecuatoriana se han expresado abiertamente. Lenguajes políticos que correspondían a los discursos más rudimentarios de la Guerra Fría han retornado tam-

bién al debate político. Las fracturas históricas del Ecuador, su pasado colonial, las perversiones de la sociedad oligárquica y terrateniente del pasado no han desaparecido. La continuidad de la confrontación política y social, expresada de

muy diversas formas, en el futuro de mediano plazo, parecería inevitable si quienes ejercen el poder económico no comprenden la necesidad de construir democracia y revertir las bases de la inequidad y la injusticia social.